



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE GOBERNANZA PÚBLICA

Expediente: 001-017144

Nombre: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha 25 de agosto de 2017 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por [REDACTED] solicitud que quedó registrada con el número 001-017144:

Estimado Ministerio de Hacienda y Función Pública, Al amparo de la Ley 19/2013 me gustaría obtener la siguiente información. Desde Access Info Europe estamos aplicando la metodología de FOIA Net para España como parte de una investigación global sobre el derecho de acceso a la información y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), https://foiadvocates.net/?page_id=11036. Según tenemos entendido, en España, el fomento y desarrollo de medidas para la implementación de la Ley 19/2013 corresponden a la Subdirección General de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública (antigua OTAI). Por ello, en el marco de esta investigación, nos gustaría saber:

- 1. ¿Cuál es el mandato y funciones respecto a la ley 19/2013 de la Subdirección General de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública (antigua OTAI)? También, el Número de personas que trabajan en la misma desempeñando funciones relacionadas con la Ley 19/2013.*
- 2. ¿Cuál es el mandato y funciones de la UITs?*
- 3. ¿Se ha desarrollado algún plan de aplicación o acción sobre de la Ley 19/2013? Tanto para publicación proactiva como de derecho de acceso. En caso afirmativo nos gustaría tener acceso al mismo.*

secretaria.dgoap@seap.minhap.es

MARÍA DE MOLINA 50
28071 MADRID
TEL 91 273 32 46/47



4. *¿Ha desarrollado o publicado el Ministerio guías, directrices o criterios para las UITs y para otras entidades públicas obligadas por la Ley para recibir y responder a solicitudes de información?*

5. *¿Se han desarrollado acciones formativas a funcionarios y trabajadores públicos (1. para trabajadores de las UITs, 2. dirigidas a otro personal de Ministerios y 3. dirigidas a personal de otras entidades públicas afectadas por la Ley) sobre la Ley 19/2013? En caso afirmativo ¿Cuántas se han desarrollado? ¿quién las ha implementado? Número de participantes, si es posible distinguiendo entre 1. trabajadores de las UITs, 2. otro personal de Ministerios y 3. personal de otras entidades públicas afectadas por la ley 19/2013.*

Me pongo a su disposición para aclarar cualquier duda sobre esta solicitud. La investigación se va a publicar el 28 de septiembre con ocasión del día internacional del derecho de acceso a la información. Por ello, les agradecería que respondiesen con la máxima celeridad posible. Muchas gracias por adelantado. Saludos.

La Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió la solicitud a la Dirección General de Gobernanza Pública el día 31 de agosto de 2017, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General **resuelve conceder el acceso a la información** a que se refiere la solicitud deducida por [REDACTED] en los términos siguientes:

Por lo que se refiere a la cuestión número 1, le comunicamos que el Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, otorgó a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) las competencias relativas al Portal de la Transparencia del Gobierno de España, al fomento de las funciones dinamizadoras y de impulso del acceso a la información pública, y a la coordinación y la supervisión de las unidades de información de transparencia de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la



Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, competencias que OPERA desarrolló a través de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información (OTAI).

Con la aprobación de los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se produce una nueva distribución de funciones entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública: se asignan las competencias en materia de administración territorial al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, mientras que se atribuyen al Ministerio de Hacienda y Función Pública las relativas a la Función Pública, la Administración Digital y la Gobernanza Pública, incluyéndose en particular dentro de esta última las competencias que hasta ese momento venía ejerciendo OPERA, organismo que se suprime pasando la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública a desarrollar sus competencias.

Por su parte, el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, concreta la citada asignación de funciones a la Secretaría de Estado de Función Pública, a quien atribuye expresamente, entre otras, las competencias de gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (art. 13.1.ñ), de coordinación de las unidades de información de transparencia de la Administración General del Estado (art. 13.1.p).

En el seno de la Secretaría de Estado de Función Pública corresponde concretamente a la Dirección General de Gobernanza Pública la función del impulso de los planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta materia, y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (art. 16.1.i del citado Real Decreto 769/2017, de 28 de julio). Asimismo, la Dirección General de Gobernanza Pública presta el apoyo y soporte necesarios a la Secretaría de Estado de Función Pública para el ejercicio de las competencias de coordinación de las unidades de información de transparencia de la Administración General del Estado y de dictar indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso (*idem*).



En fin, de acuerdo con el apartado 2 del mismo Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, corresponde a la Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado y a la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano el ejercicio, de manera coordinada, de las funciones de la Dirección General de Gobernanza Pública referidas a la transparencia antes señaladas.

Además de los órganos superiores y directivos señalados, le comunicamos que en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Función Pública las funciones que el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, atribuye a las Unidades de Información (UIT) han sido asignadas a la Secretaría General Técnica del Departamento (art. 19.1.q del ya citado Real Decreto 769/2017, de 28 de julio), que desarrolla tales competencias a través de la Subdirección General de Información de Transparencia y Contenidos Web (art. 19.2.f del mismo Real Decreto).

Por lo que se refiere a las personas que trabajan a tiempo completo en esta Dirección General de Gobernanza Pública desempeñando funciones relacionadas con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, le informamos que su número asciende a 8.

En cuanto a la cuestión número 2 de su solicitud, le comunicamos que el mandato y funciones de las Unidades de Información de Transparencia de la Administración General del Estado (UIT) son los establecidos en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En relación con el punto 3 de su solicitud, le comunicamos que en el marco del III Plan de Acción de España 2017-2019 de la Alianza Para El Gobierno Abierto se incluye un compromiso de mejora del Portal de Transparencia y el Derecho de Acceso, desde una perspectiva participativa, en el que se tendrán en cuenta las aportaciones de la sociedad civil, introduciendo modificaciones en la arquitectura de la información para optimizar el sistema de búsquedas con la finalidad de hacerlo más efectivo, mejorando la calidad de los contenidos, introduciendo nueva información actualizada, abriendo nuevos canales para el ejercicio del derecho de acceso (aplicación móvil, redes sociales), así como simplificando y facilitando la presentación de solicitudes de información pública (compromiso 3.1).



Asimismo, le comunicamos que otro de los compromisos del citado III Plan de Gobierno Abierto es el del desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante la aprobación de su reglamento, lo que va a permitir detallar marco de actuación general para que se publique de manera proactiva aquella información más demandada y cubrir la necesidad de fijar criterios acordes a la realidad actual, tanto en publicidad activa como para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (compromiso 3.5).

Los compromisos incluidos en el III Plan de Acción de España 2017-2019 de la Alianza Para El Gobierno Abierto puede consultarse en el siguiente enlace: http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:74d66aee-760c-4962-983e-0b250fb583b8/2017_Junio_Spain_III_Plan_GA_OGP_vf.pdf

Por lo que se refiere al punto 4 de su solicitud, le indicamos que la competencia para la emisión de directrices o criterios relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y cualquier otra interpretación derivada de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el artículo 38 de dicha norma.

De igual forma, le comunicamos que sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la extinta Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) publicó en 2016 una *Guía básica de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública*, dirigida esencialmente a las Unidades de Información de Transparencia de la Administración General del Estado, documento que tiene como finalidad garantizar el aumento de la eficiencia en los procesos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Puede acceder a dicha *Guía* a través del siguiente enlace del Portal de la Transparencia del Gobierno de España: <http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf>.



En fin, por lo que se refiere a la pregunta número 5 de solicitud, adjuntamos a la presente resolución dos documentos con información sobre las acciones formativas dirigidas a funcionarios y trabajadores públicos relacionadas con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, organizadas en el Instituto Nacional de Administración Pública, el primer anexo recoge la información sobre las acciones impartidas en 2014, 2015 y 2016 y el segundo anexo las realizadas en el primer semestre de 2017.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La Directora General de Gobernanza Pública

María Pía Junquera Temprano